



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

**EXPTE.30910/2024/CA1**

**“COOPERATIVA DE TRABAJO PRO PAN LIMITADA c/MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD s/IMPUGNACION DE DEUDA”**

Sentencia Definitiva

En la Ciudad de Buenos Aires, reunidos los Sres. Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en la presente causa se procede a votar en el siguiente orden:

**EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:**

Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de la Sala en virtud de la impugnación presentada por la Cooperativa de Trabajo Pro Pan Limitada contra la Resolución 27185 del 13 de septiembre de 2023 que le impuso una multa de \$ 65.381 por infracción cometida al artículo agregado sin número a continuación del 40 de la ley 11.683 (t.o. por decreto 821/98), respecto, en principio, a ocho trabajadores, de los cuales se la absuelve respecto de Marino Hugo Dario, Lemmi Medina Rodolfo Saul y De Negro Mónica Andrea, dejando subsistente el reclamo por quienes el organismo consideró dependientes de la cooperativa labrándose el correspondiente acta de inspección y posterior determinación de deuda.

El apelante efectúa el depósito previo exigido por el artículo 10 inciso B. de la Resolución MTEySS 655/2005, por lo que corresponde proceder a la apertura de la presente instancia judicial.

Concretamente la impugnante sostiene que los trabajadores inspeccionados no son dependientes suyos, sino simples socios de la cooperativa. Explica que la misma se encuentra legalmente constituida e inscripta, contando con autorización para funcionar. Rechaza la decisión atacada por considerarla carente de motivación, y arbitraria pues para así decidir el organismo prescindió de la prueba documental acompañada que hubiera demostrado a las claras que se trata de trabajadores monotributistas, que solo reciben órdenes de otros socios de la cooperativa.

También solicita se declare la prescripción liberatoria, respecto a la deuda reclamada, atento el tiempo transcurrido desde que se realizó la inspección y la determinación del tributo o sanción económica que se pretende aplicar.

El organismo, por su parte, expresa que habiendo encontrado a trabajadores prestando servicios propios del giro comercial de la imputada, se presume la existencia del vínculo laboral, resultando insuficiente para desvirtuar tal presunción la denominación o instrumentación que las partes den a esa relación. Agrega también que la calidad de monotributistas no obsta a que





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

se mantengan relaciones de dependencia con la imputada por lo que la defensa esgrimida no puede tener acogida favorable.

Concluye afirmando que el acta de comprobación no fue desvirtuada por y, consecuentemente, la infracción imputada quedó debidamente acreditada en las actuaciones administrativas lo que la hace merecedora de la sanción impuesta.

Planteada así la cuestión, corresponde dilucidar si nos encontramos frente al desempeño o no de tareas dependientes.

Cabe señalar, que las cooperativas de producción o trabajo son asociaciones de personas que se unen para producir bienes o prestar servicios y cuyo objetivo es mejorar sus condiciones económicas, sociales y culturales pero organizándose democráticamente en asambleas de sus miembros, para elegir autoridades y lograr una distribución equitativa de los beneficios económicos que puedan generarse a través de la actividad personal de estos.

Se caracterizan por proteger la autogestión y la conducción democrática de la asociación siendo su finalidad proporcionar trabajo a sus asociados, los que reciben una parte de los excedentes que genera la cooperativa siempre en proporción a la labor realizada por cada uno. Su finalidad es obviamente, económica, como la de cualquier otra asociación productiva –sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada- pero, desde el punto de vista práctico, al estar formada por trabajadores y trabajadoras, lo pretendido es elevar sus condiciones de vida, constituyendo una respuesta frente al sistema de producción donde el trabajador no participa del rédito de la explotación.

La idea que mueve a dichas entidades es reemplazar la figura del trabajador asalariado por el socio cooperativista, dueño del capital y del trabajo, y a la empresa autocrática y vertical, por una organización horizontal, igualitaria y solidaria. Se ha expresado que las citadas asociaciones buscan evitar la ilegítima explotación del trabajo manual o intelectual del hombre. Su objetivo político no es favorecer sino suprimir, en la medida de lo posible, el trabajo asalariado, para sustituirlo por el trabajo en común, mediante una aportación libre y solidaria del trabajo de todos –técnicos, empleados y obreros- que contribuyen de tal manera a la obtención de beneficios puros en los que participan exclusivamente los que conjugan sus aptitudes y realizaciones, volcándolas a favor de la entidad.

No se concibe la cooperativa de trabajo como una sociedad cerrada que instituya privilegios o reconozca discriminación de cualquier tipo en beneficio de alguno de sus integrantes, sino que debe ser una sociedad abierta; no se la considera, tampoco, una institución guiada por un primordial espíritu de lucro, consagrada a la acumulación de capitales e intereses o gobernada por núcleos excluyentes, al modo de una empresa comercial que utiliza sin restricciones el





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

trabajo de los individuos, insertándolos como colaboradores subordinados a las órdenes de un superior (CSJN sent. del 24/11/2009 “Lago Castro, Andrés Manuel c/Cooperativa Nueva Salvia Ltda. y otros” Fallos 332:2614).

Es por ello que se entiende que, en una cooperativa de trabajo genuina la calidad de socio excluye la del trabajador dependiente, lo que determinaría la inaplicabilidad de las previsiones de la ley de contrato de trabajo, en especial el art. 27 de la LCT y que lo contrario sucede cuando se detecta una entidad que, formalmente inscripta como cooperativa, no cumple con los postulados institucionales que justifican su creación, no pudiendo ignorarse que en la práctica, las citadas cooperativas resultan entes permeables a situaciones de fraude laboral y con frecuencia se enmascaran bajo su estructura societaria, típicas prestaciones de carácter dependiente.

En ciertas ocasiones la cooperativa de trabajo actúa como simple proveedora de mano de obra en beneficio de terceros, resultando alcanzada por la legislación laboral y ello explica que, en su oportunidad, el Poder Ejecutivo haya sancionado el decreto 2.015/94 cuyas directivas vedan la posibilidad que las cooperativas de trabajo, para el cumplimiento de su objeto social, provean la contratación de los servicios cooperativos por terceras personas utilizando la fuerza de trabajo de sus asociados.

Desde luego, la proyección y aplicación de las previsiones del art. 14 de la LCT –denuncia de fraude laboral- pueden servir para descorrer el velo corporativo y lograr la tipificación de las relaciones de los asociados a una cooperativa bajo el marco del derecho laboral y, a tal fin, el art. 40 de la ley 25.877 faculta a la inspección del trabajo a ejercer su contralor, a fin de verificar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social. Paralelamente les veda actuar como empresas de provisión de servicios eventuales y de temporada y brindar, de cualquier modo, los servicios propios de las agencias de colocación.

En el caso que nos ocupa, y tal como se expresara al comienzo de este voto, el organismo detectó al momento de efectuar la inspección (06/11/2012) 8 personas desempeñando tareas en el local de la calle Alberti 1.732 de la localidad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.

Tras analizar la causa, el ministerio interviniente dejó sin efecto el reclamo respecto a tres trabajadores (Mónica Andrea Del Negro, Rodolfo Saul Lemmi Medina y Hugo Darío Marino) quedando subsistente con relacion a otros 5 (José Scerra, Roque Torres, Eugenio Baldini, Ester Martínez, y Hugo Marino).

Ahora bien en el presente caso la documentación acompañada da cuenta que los trabajadores inspeccionados manifestaron estar asociados a la cooperativa, que firmaron una solicitud de ingreso a la misma, que se les confirmó que fueron





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

aceptados, que no abonaron cuota de ingreso, que los elementos para realizar las tareas que utilizaban eran de propiedad de la cooperativa, que recibían ordenes de la presidente de la cooperativa, Sra. Ana María Del Canto, o de otro socio, que concurrían a las asambleas, que estaban inscriptos como autónomos, que si les pagaban retornos. Que se les abonaba proporcionando recibos.

Con fecha 29 de noviembre de 2012 se presentó en sede administrativa una nota acompañando fotocopias del acta del Consejo de Administración de la entidad, de la Asamblea de Distribución de Autoridades, de las distintas solicitudes de asociación de todos los trabajadores relevados en la inspección y de las distintas constancias de monotributo y de su pago.

Ahora bien, el artículo 5º) del Acta constitutiva establece en forma expresa que la cooperativa tendrá por objeto asumir por su propia cuenta, valiéndose del trabajo de sus asociados, las actividades inherentes a panificación, pastelería, sandwichería, facturación, helados, gastronomía y productos alimenticios en general.

Obra también en la causa documentación que acredita que la Cooperativa de Trabajo Pro Pan Ltda. fue inscripta en el Instituto de Asociativismo y Economía Social (INAES) bajo el número 24951 -con fecha 15 de septiembre de 2003- siendo su estatuto aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social.

Planteada así la cuestión y habiéndose constatado que la apelante es una entidad legalmente inscripta en los términos del régimen de cooperativas, entiendo que lo resuelto debe ser dejado sin efecto, ya que la presunción que emana del art. 12 de la ley 19.549 recientemente modificado por el art.33 de la ley 27.742, puede ser alterada por prueba en contrario y el hecho que durante el curso de la inspección se encontraran distintas personas desempeñando tareas propias del giro comercial de esa cooperativa no necesariamente justifica una condena punitiva con base en un presunto fraude laboral(art. 386 CPCCN)

Ello en atención a que es deber del Estado llegar a la verdad material de los hechos acaecidos y ejercitar con prudencia sus facultades sancionatorias a los fines de no violentar el artículo 17 de nuestra Carta magna.

El sentido de este voto torna innecesario el tratamiento de los demás agravios vertidos

Con base en lo anterior, propongo habilitar la presente instancia, hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, dejando sin efecto la sanción patrimonial aplicada. Las costas deberán ser interpuestas en el orden causado atento la naturaleza de la cuestión planteada y existir opiniones contrapuestas a su respecto (art.68 2do. párrafo CPCCN).





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

**EL DOCTOR JUAN FANTINI ALBARENQUE DIJO:**

Adhiero a la propuesta del voto que antecede.

**LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:**

Adhiero al voto del Doctor Carnota.

En virtud de lo expresado el Tribunal **RESUELVE:** 1º) Habilitar la presente instancia judicial, 2º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, dejando sin efecto la sanción patrimonial impuesta, 3º) Imponer las costas en el orden causado atento la naturaleza de la cuestión planteada y existir opiniones contrapuestas a su respecto (art.68 2do. párrafo CPCCN). Regístrese, notifíquese, publíquese y, oportunamente, remítase.

JUAN FANTINI ALBARENQUE  
Juez de Cámara

WALTER F. CARNOTA  
Juez de Cámara Subrogante

NORA CARMEN DORADO  
Juez de Cámara

Ante mí: JOSE MARIA SANCHEZ MOSCOSO  
Prosecretario de Cámara

ALP.

